

Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, condenó a Miguel Ángel Sánchez Serrano como autor del delito consumado de conducción, a sabiendas, de un vehículo con placa patente perteneciente a otro, perpetrado en la comuna de Pelluhue, el 27 de mayo de 2020, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, a una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales, a la suspensión de su licencia de conducir por el término de 1 año y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Asimismo, se le condena como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado, perpetrado en la misma fecha y lugar a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y a una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales. Se dispuso el cumplimiento efectivo de las penas impuestas.

La sentencia fue impugnada por la defensa, recurso que se conoció en audiencia pública el pasado veintiocho de febrero del presente. Luego de la vista se citó a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta suscrita en esa misma fecha.

Considerando:

Primero: Que como causal principal, la defensa estima infringido el artículo 373 letra a), del Código Procesal Penal. Lo anterior debido a que parte de los documentos acompañados a la acusación, correspondiente al



Certificado de Dominio Vigente de los vehículos placa patente única LHGC-74 y LCYX-52 no formaban parte de la carpeta investigativa al cierre de la investigación ni se encontraban digitalizados al momentos de adjuntarse la acusación, reclamando de dicha situación en la audiencia de preparación de juicio oral, por cuanto dicha infracción constituye una vulneración lo prescrito en los artículos 19 N° 3 (en su dimensión derecho a un procedimiento racional y justo), 19 N° 5 (derecho a la inviolabilidad del hogar) y 19 N° 7 (derecho a la libertad personal), todos de la Constitución Política del Estado; en relación con los artículos 7, 9, 10, 259, 260 del Código Procesal Penal.

Pide invalidar la sentencia y el juicio oral, disponiéndose un nuevo juicio en que se excluya del auto de apertura los citados documentos.

Por último, como causal subsidiaria denuncia infringido el artículo 374 letra e) del código adjetivo, en virtud de la falta de corroboración, en relación al artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.

Refiere que los sentenciadores valoraron los medios pruebas faltando al principio de la lógica de la corroboración respecto del delito base exigido por el tipo penal. Explica que la única prueba aportada por el Ministerio Público para acreditar ese punto fue los dichos de los funcionarios aprehensores, y del perito, del cual, dicha información no era el objeto de la pericia sino de una información adicional dada verbalmente, sin que siquiera se acompañase copia de alguna denuncia o registro formal y objetivo de encargo de robo, o declaración de alguno de los propietarios en calidad de dueños de los vehículos, o a lo menos de quienes hayan realizado las supuestas denuncias. Los dichos de los testigos policiales como prueba del origen ilícito del vehículo y placas patentes, no fue corroborada ni ratificada por ningún otro medio probatorio, así, no se contó con la declaración del propietario del vehículo ni



con el testimonio del denunciante y víctima del supuesto robo ni siquiera con la declaración del funcionario policial que habría tomado dicha denuncia.

Pide invalidar la sentencia y el juicio oral y se disponga de un nuevo juicio oral.

Segundo: Que los hechos que el fallo ha tenido por demostrados en su considerando octavo son los siguientes: *“1.- El 27 de mayo del año 2020, en el sector Pueblo Hundido de la comuna de Pelluhue, Miguel Ángel Sánchez Serrano fue controlado por carabineros en circunstancias que se encontraba conduciendo el automóvil marca Hyundai, con la placa patente única LCYX.52, quienes verificaron que a dicho vehículo le corresponde la placa patente única LHGC.74 y que tenía un encargo por el delito de robo con intimidación, denunciado con fecha 09 de enero del año 2020 en la Quinta Comisaría de Conchalí. Además, las placas patentes que portaba el vehículo mantenían un encargo vigente de la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago de fecha 14 de enero del año 2020, sabiendo Sánchez Serrano o no pudiendo si no saber el origen ilícito del vehículo y que las placas patentes que éste portaba no le correspondían.*

2.- En horas de la mañana del 11 de julio del año 2020, en sector denominado camino a las Lomas, pasaje Los Canelos, comuna de Pelluhue, Miguel Ángel Sánchez Serrano conducía el automóvil marca Volkswagen, color blanco PPU RA6316, llevando a sabiendas, en el parachoques delantero la placa patente KZ-5907, que corresponde a otro vehículo”.

Tercero: Que la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal supone, para su aceptación, una infracción sustancial producida en el procedimiento o en la dictación de la sentencia, de derechos o garantías



asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

La doctrina y jurisprudencia están de acuerdo en que la infracción de derechos o garantías debe ser sustancial, lo que implica que no toda vulneración determina automáticamente la nulidad del juicio oral y la sentencia, sino que ésta debe ser de tal entidad que comprometa los aspectos esenciales de la garantía, decisión que debe ser adoptada sobre la base del criterio de proporcionalidad. En otros términos, la afectación constitucional alegada debe perjudicar en forma esencial el ámbito de derechos del recurrente y no ser de una importancia secundaria o que no tenga importancia alguna para él. (Horvitz-López, Derecho Procesal Penal Chileno, T.II, pp. 414-415).

Estas opiniones han sido compartidas por esta Corte en innumerables pronunciamientos pretéritos, al dictaminar que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso (SCS Rol N° 1.237-2010, 45.313-2021).

Se ha expresado también que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.

Cuarto: Que, tal como se expuso, los defectos denunciados consisten en el hecho que los certificados de dominio vigente de los vehículos placa



patente única LHGC.74 y LCYX-52 no formaban parte de la carpeta investigativa al cierre de la investigación ni se encontraban digitalizados al momento de adjuntarse la acusación.

En primer término, no existe sorpresa para la defensa, toda vez que los documentos fueron debidamente requeridos por el ente persecutor, tomando la defensa pleno conocimiento tanto de la diligencia como del contenido de cada uno de los documentos.

De otra parte, a fin de asentar la existencia del delito base para el delito de receptación, los sentenciadores se valieron de diferentes medios probatorios, como fueron la declaración del carabinero José Miguel Cancino Guerra, quien refirió *que el 27 de mayo de 2020 se encontraba de servicio en la ruta M-80-N, sector Pueblo Hundido, circunstancias en que fiscalizaron el vehículo marca Hyundai modelo I10 placa patente LCYK52, verificando que mantenía encargo por robo de fecha 14 de enero de 2020 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago; agregó en esa misma declaración que el conductor del vehículo controlado le indicó que “El conductor señaló que hace un mes a la fecha compró el vehículo en Santiago, sabiendo que la patente tenía encargo por robo”;* señaló el carabinero que, continuando con el procedimiento, *“Autorizó la verificación del chasis del vehículo, que se encuentra bajo relieve estampado en el área del piso del asiento del acompañante, constatando que no coincidía con el número de chasis de la documentación, por lo que consultaron a CENCO Talca, señalándole la funcionaria que correspondía a un automóvil Hyundai modelo Grand I10 2020, placa patente LHGC74, el que mantenía encargo por robo con intimidación del 09 de enero de 2020 de la Quinta Comisaría de Conchalí, Santiago. En su misma declaración el funcionario policial dio cuenta que “El vehículo fue*



entregado a su propietaria Pamela González Carvajal de la ciudad de Santiago, Conchalí. *“Ella dijo que mantenía el vehículo asegurado y que fue su pareja a quien le sustrajeron el móvil.”*

Se tuvo además presente lo expuesto por el perito Iván Francisco Rebolledo Cabezas, quien concluyó *“que la placa patente no le corresponde al vehículo, el número de motor y chasis no están alterado y están asociados a otras patentes que no estaban en el móvil. El automóvil no tiene signos de forzamiento en chapas ni puertas. La patente que corresponde al chasis y motor, LHGC74, registra encargo por robo con intimidación de la Región Metropolitana.”*

Además el tribunal tuvo presente *“(02) PLACAS PATENTE ÚNICAS LCYX-52, así como los documentos del vehículo que portaba el acusado a la fiscalización, estos son: un certificado de homologación individual N° 2778711 correspondiente al automóvil, marca Hyundai, modelo Grand I10, color gris oscuro, año 2019, motor G3LAJM711082, Placa Patente LCYX52; un permiso de circulación de la municipalidad de Florida Folio N° 561423, en que figura vehículo marca Hyundai modelo Grand I10 año 2019, Chasis MALA751AAKM947400 Motor G3LAJM711082, color gris oscuro, placa única LCYX.52-3; un certificado de inscripción R.V.M. Folio 500023854942 en que figura tipo de vehículo automóvil año 2019 marca Hyundai, modelo Grand I10 Nro. De motor G3LAJM711082, Nro. Chasis MALA751AAKM947400”.*

Como se aprecia, los certificados cuya incorporación se cuestiona, no es el único medio probatorio que llevó a los sentenciadores a formar convicción de manera que el vicio invocado no tiene la trascendencia requerida, pues como se señaló precedentemente, fue un cúmulo de antecedentes los que llevaron a los juzgadores a concluir la existencia del hecho punible y la participación del



imputado, lo que, según el artículo 375 del Código Procesal Penal, impide declarar la nulidad del juicio y de la sentencia, pues aun prescindiendo de la declaración de tales documentos, la convicción condenatoria se sostiene en otros elementos de cargo, como se lee del fallo en su considerando noveno, condiciones en las que la decisión del juicio habría sido la misma. A mayor abundamiento, la recurrente no indicó de que forma se habría afectado el derecho de su defendido.

Quinto: Que, en lo que dice relación con la causal subsidiaria, a fin de dirimir lo planteado, es menester estarse a lo asentado por el tribunal de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, efectúe una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, ya que implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la reproducción parcial de los testimonios rendidos en el juicio -sólo de lo que interesa a la recurrente-, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contraexamen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.



Sexto: Que en lo que atañe a la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre la justificación de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Así, la salvaguardia esencial del derecho a una sentencia fundada y motivada encuentra consagración en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, que impone a los sentenciadores la obligación de exponer de manera clara, lógica y completa, cada uno de los hechos y circunstancias que



se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo ordenamiento. Tal disposición establece un sistema de libertad en la valoración de la prueba, el que sólo reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. De esta manera, el proceso de clausura de un procedimiento legalmente tramitado lo constituye una sentencia que se ciñe a los parámetros citados.

Séptimo: Que se desprende de la simple enunciación de estos preceptos que nuestra legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces un trabajo de elaboración meticuloso y cuidadoso en la concepción de sus fallos. La preocupación esencial de toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del cuerpo de leyes ya citado.

Al efecto, esta Corte Suprema ha declarado que el fin de la fundamentación que exige la norma que sustenta el recurso por la causal que se analiza no es otro que permitir la reproducción y fijación del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia, carga que se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 36, aplicable en la especie por ser común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, que declara que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno aquella debida fundamentación, debiendo entonces dar cuenta de lo escuchado en audiencia y, en base a ello, razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que se han



tenido en cuenta para preferir un medio respecto del otro o para darle preeminencia, de modo que de dicho análisis fluya la constancia de cómo hicieron uso de la libertad para apreciar la prueba y llegaron a dar por acreditados los acontecimientos y circunstancias que serán inamovibles posteriormente (SCS N° 3873-2011, entre otras). Lo anterior evidencia, en concepto de Daniela Accatino, la opción de nuestro sistema procesal penal por un modelo analítico de fundamentación del juicio de hecho (“El modelo legal de justificación de los enunciados probatorios en las sentencias penales y su control a través del recurso de nulidad”, en “Formación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal”, Abeledo Perrot, 2010, p.122).

Estas exigencias no están desprovistas del correspondiente respaldo constitucional, ya que el inciso 6° del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República declara que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, por lo que las señaladas normas reglamentan la forma cómo los jueces deben dar por acreditados los hechos y, si no son respetadas, permite la anulación correspondiente.

Octavo: Que en lo tocante a la alegación relativa a la supuesta infracción del principio de la corroboración denunciada por el impugnante, conviene señalar que los sentenciadores como se indicó en el considerando cuarto de este fallo, asientan sus conclusiones en diversos y variados medios probatorios, proviniendo de fuentes independientes que permitieron ir corroborando la fiabilidad de los medios aportados por el ente persecutor e ir verificando la veracidad de los hechos asentados en la acusación. En efecto no solo está la declaración del funcionario policial, se incorporó además las fotografías del vehículo, placas patentes, chasis; sumada a la documental



corresponde al certificado de homologación individual que fue el entregado por el acusado en la fiscalización; certificado de inscripción del vehículo que portaba y permiso de circulación de la municipalidad de La Florida que portaba el conductor. A todo lo anterior se suma el peritaje.

Así las cosas, es posible colegir que a través de su reclamo lo que se pretende es revertir una valoración no compartida por la defensa respecto de las probanzas rendidas en autos, más no la inexistencia o la contraposición de la mismas a las reglas de la lógica como contempla la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal.

Por tal motivo la nulidad impetrada no puede prosperar

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 342, 372, 373, letra a), 376, 384 y 386 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado Miguel Ángel Sánchez Serrano, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la causa RUC 2010027100-2, RIT 35-2021, declarándose que ella no es nula, como tampoco lo es el juicio oral que le sirvió de antecedente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavorari.

Rol N° 66.260-2021.-





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorlari G. Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

